

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, veinte (20) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE : ALBA LUCIA GONZÁLEZ PUERTA
DEMANDADO : ALMACENES ÉXITO S.A
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-266-31-05-001-2019-00456
RADICADO INTERNO : 350-22
DECISIÓN : REVOCA, DECLARA, ORDENA, CONDENA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO : 022

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que entre la demandante la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A, existió una relación laboral regida por un contrato a término indefinido, que tuvo como extremos temporales desde 10 de noviembre de 2010 al 4 de octubre de 2016, fecha en que finalizó mediante acuerdo de terminación de contrato laboral; el acuerdo de terminación del contrato laboral suscrito por la demandante el 4 de octubre de 2016 es nulo y/o ineficaz, por adolecer de vicios en el consentimiento; se declare que al momento de la terminación de la relación laboral, la accionante se encontraba en situación de debilidad, por lo tanto, gozaba de estabilidad laboral reforzada; que la sociedad demandada, causó perjuicios a la accionante, los cuales está en la obligación de indemnizar.

Se CONDENE a la sociedad accionada, a reintegrar y/o reincorporar a la demandante al cargo que venía desempeñando en la empresa al momento de la terminación del contrato laboral o a uno de similares o mejores características, sin solución de continuidad; al pago de la totalidad de salarios, vacaciones, prestaciones sociales legales y extralegales, dejados de percibir desde el 4 de octubre de 2016 hasta el reintegro, y los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones, este último ante Colpensiones; así mismo, se condene a la accionada a pagar a la demandante, la indemnización equivalente a 180 días de salario del art. 26 de la Ley 361 de 1997 modificado por el art. 137 del Decreto 019 de 2012; a pagar a la demandante la suma de 50 SMLMV o la que se logre acreditar en el proceso, por concepto de la indemnización de los perjuicios ocasionados, con ocasión de la terminación del contrato laboral; a la indexación de todas y cada uno de los valores que llegaren a reconocerse en favor de la demandante; y se condene en costas procesales.

Como supuestos facticos manifestó que, prestó sus servicios personales para la sociedad ALMACENES EXISTO S.A, desde el 11 de noviembre de 2010 hasta el 4 de octubre de 2016, en el cargo de chef II Éxito, en el cual le correspondía realizar labores relacionadas con la preparación y manipulación de alimentos en grandes cantidades, pesar productos, manejar inventario de alimentos, levantar grandes pesos como galones de aceite, labores de aseo y en general; devengaba un salario básico de \$1.437.900; desempeñó sus labores en el establecimiento de comercio Éxito- Caucaasia- dependencia 265, ubicado en el municipio de Caucaasia – Antioquia; el 5 de noviembre d 2010, la IPS SU SALUD INTEGRAL Y CIA LTDA, le practicó los exámenes de ingreso, en el cual no se le encontró incapacidad alguna o limitación física, para laborar en dicha empresa; las labores realizadas, fueron cumplidas en horarios extendidos, porque debía estar disponible en cada jornada para atender los eventos o show que se realizaran en el establecimiento incluidos los días sábados, domingos y festivos; las labores realizadas, obedecían actividades del giro normal y ordinario del objeto social de la empresa, y no obedecían a incrementos de la producción, remplazos de personal por incapacidades o licencia de maternidad.

Que, en el año 2012, la demandante comenzó a presentar graves quebrantos de salud, materializaron en fuertes dolores en sus manos, periodos de pérdida de fuerza en las mismas, lo que generó incapacidades para presentarse a laborar; el 11 de enero de 2013, la sociedad demandada fue notificada del

proceso de calificación de posible enfermedad profesional de la Sra. Alba Lucía González Puerta.

Con ocasión de los graves quebrantos de salud que sufría la demandante, la EPS COMFENALCO le concedió aproximadamente 60 incapacidades médico-laborales para trabajar, por un total de 454 días aproximadamente, entre los años 2011 a 2015; el 14 de febrero de 2014, la IPS SALUD INTEGRAL Y CIA LTDA le diagnosticó Dolor lumbar crónico, Epicondilitis, Defecto de refracción y Síndrome de túnel carpiano; el 16 de septiembre de 2014, el departamento de medicina laboral de la EPS SALUDCOOP, emitió recomendaciones laborales a la sociedad Almacenes Éxito S.A, respecto de la condiciones de salud de la trabajadora; a partir del año 2014, le fueron otorgadas incapacidades laborales, de manera continua e ininterrumpida hasta el mes de octubre del año 2016, periodo en el cual le fueron practicadas varias terapias, procedimientos médicos y una cirugía en la mano derecha del túnel carpiano.

El 22 de mayo de 2015, la EPS SALUDCOOP le notificó a la demandante que el diagnóstico del síndrome de túnel carpiano bilateral y epicondilitis medial bilateral eran de origen laboral, sin que determinará el porcentaje de la PCL; el 4 de septiembre de 2015, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, en dictamen del 4 de septiembre de 2015, determinó el origen común de la patologías que presenta la demandante, sin determinar el porcentaje de la PCL; la ARL SURA, mediante dictamen del 29 de junio de 2017 determinó una PCL del 12.15% donde el origen era enfermedad laboral; en dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia del 26 de octubre de 2017 se modificó el porcentaje de la PCL al 29,03% y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en dictamen del 25 de junio de 2018 determinó una PCL del 18,76 %, conservando el origen laboral de la misma.

Narró la demandante que estaba casada con el Sr. Cristian David Ochoa, quien fue asesinado el 3 de octubre de 2014, por un grupo al margen de la ley; con ocasión de las amenazas que recibió contra su vida y la de su familia por parte de grupos al margen de la ley, el 24 de octubre de 2014 (fecha para la cual se encontraba incapacitada para laborar), salió desplazada del Municipio de Caucaasia, hacia el Municipio de Medellín; que ese hecho fue puesto en conocimiento del gerente del Éxito y de los jefes de gestión humana de la regional, a efectos de que se sirviera reubicarse en otra sucursal de la empresa, sin lograr resultados positivos; ante la falta de respuesta de su empleador para una reubicación laboral y encontrándose próxima a vencer su última incapacidad laboral, el 26 de septiembre de 2016 a través de la

personería Municipal de Guarne, formuló nueva solicitud de traslado laboral, en cualquiera de los 160 almacenes de la regional Antioquia donde hace presencia la sociedad demandada, que no perteneciera a la regional del Bajo Cauca Antioqueño; la demandante recibió llamada por parte del señor Santiago Garzón, jefe de gestión humana de la regional Antioquia-Éxito, quien de manera insistente le indicó que era mejor que presentara la renuncia a la empresa, ya que no había una sola sucursal donde pudiera ser reubicada laboralmente.

El 1º de octubre de 2016, recibió llamada del señor Garzón, quien le informó que su incapacidad había vencido y que por tal razón, debía hacerse presente en la sede del Éxito- Caucaasia para iniciar sus labores, quien de manera insistente le indicó que era mejor que presentara la renuncia a la empresa; el 1º de octubre de 2016 se presentó en compañía de su abogada Lina Osorno, en el Éxito-Envigado, para tratar de buscar acercamiento frente a su situación laboral, siendo atendida por los señores Santiago Garzón Blanca Rojas (encargada del área de gestión humana), quienes impidieron la entrada de su abogada e hicieron pasar a la demandante a una oficina, en la cual, ejercieron presión verbal y psicológica para que presentara su carta de renuncia a la empresa, ofreciéndole para ello, la suma de \$2.000.000 o que en su defecto la mandarían a laborar nuevamente al Éxito-Caucaasia y ante las súplicas de la demandada para que no la mandaran a esa sucursal, debido a las amenazas recibidas el Sr. Santiago Garzón le indico que “ *tenía dos opciones, irse a morir a Caucaasia y darle dolor a su familia o renuncie y viva felices, en sus manos está el bienestar de sus hijos, usted es la única culpable del dolor de ellos... que se tomará dos días para que lo pensara...*”, presiones ante las cuales no cedió la demandante.

El 3 de octubre de 2016, ante la inminencia de tener que presentarse a laborar en la sede del Éxito-Caucaasia y el riesgo que ellos representaba para su vida y la de su familia, entro en una crisis nerviosa, debiendo acudir por urgencias a la clínica ESE Nuestra señora de la candelaria- Guarne, donde se le diagnostico depresión leve bajo riesgo suicida por escala de SAD; estando en urgencias, recibió una llamada del Sr. Santiago Garzón, quien le comunico que no viajara a la sede Éxito-Caucaasia, sino que se hiciera presente el 4 de octubre 2016, al Éxito Envigado; la demandante acudió a la citación en compañía su hijo Juan Carlos Londoño González y Laura Morales Osorio, la hicieron pasar a la oficina de gestión humana, en donde se encontraba la Sra. Blanca Rojas, y ante la negativa de presentar su renuncia nuevamente ejercieron actos de presión en contra de la demandante indicándole que “ ...

no buscar casa para vivir allá, que ubicara una tumba enseguida de la de mi esposo, que lo más seguro era que no duraba mucho allá lo uno que me podía ayudar era aceptando mi renuncia voluntaria, llore le expuse mi situación económica y me respondió que de que me servía un salario en una tumba me dijo toma o lo deja dígame de una vez si renuncia se salva y salva a sus familia y les evita un sufrimiento a si no renuncia nos toca prepararnos para el sepelio...).

Ante la imposibilidad para que su empleador la trasladara de sede de trabajo, por miedo a perder su vida o la de su familia y por la fuerte presión que contra ella se ejerció, firmo el documento presentado por el representante del empleador, denominado “acuerdo de terminación de contrato laboral” aseguró la demandante, que la voluntad plasmada en el “acuerdo de terminación de contrato laboral” con su firma, no fue libre, consciente, ni voluntaria, dada la fuerza y la violencia que se ejerce frente a ella; el acuerdo de terminación del contrato se dio sin autorización ni visto bueno del Ministerio del Trabajo.

Señaló que no le fueron practicados los exámenes médicos de egreso; la sociedad Almacenes Éxito S.A era conocedora del delicado estado de salud, al haberle allegado las incapacidades e informó verbal y telefónicamente al empleador; a partir de la terminación del contrato laboral con la empresa demandada, la enfermedad que padecía la demandante se agudizó, ya que ante la falta de recursos económicos y la falta de cobertura en el sistema de seguridad social en salud, los procedimientos médicos se vieron interrumpidos; como consecuencia del despido, la sociedad demandada ha causado perjuicios a la demandante, los cuales se cuantifican como daño moral y a la vida en relación, daños que los estimó en la suma de 50 SMLMV.

RESPUESTA A LA DEMANDA

La sociedad ALMACENES ÉXITO S.A en la contestación a la demanda, manifestó que no es cierto que haya iniciado labores el 5 de noviembre de 2010, porque inició el 10 de noviembre, pero acepta que se le hayan practicado los exámenes de ingreso; no es cierto que tuviera que levantar cargas pesadas; que su jornada laboral superara las 8 horas, dado que la jornada era de lunes a domingo de 11am a 7pm y tenía un día de descanso a la semana; no es cierto que haya tenido graves quebrantos de salud sino que se trataron de cortas incapacidades con diversos diagnósticos y ninguno corresponde a túnel carpiano ni epicondilitis y advierte que desde el inicio de la relación laboral hasta las incapacidades del año 2014 ningún diagnostico correspondía

esas patologías y los quebrantos de salud se debían a enfermedad general; no es cierto que se hayan realizado llamadas a la demandante recomendándole presentar la renuncia; que no es cierto que el Sr. Santiago Garzón la haya llamado informándole el vencimiento de la incapacidad, dado que la entidad no realiza ese tipo de recordatorios; no es cierto que sobre la demandante se ejerciera presión para presentar renuncia pero acepta que entre las partes se firmó un acuerdo de terminación del contrato laboral donde la demandante manifestó su deseo de retirarse de la compañía; no es cierto que la voluntad plasmada en el acuerdo de terminación del contrato no sea libre y voluntario; no es cierto que al momento de la terminación del contrato, la demandante se encontrara en estado de debilidad y vulnerabilidad y la misma demandante confiesa que para esa fecha no estaba incapacitada; no acepta que la sociedad accionada haya violado principios constitucionales de estabilidad en el empleo y de la realidad sobre las formas consagrados; ni que como consecuencia del despido, la sociedad demandada ha causado perjuicios a la demandante.

Que no le consta que el día 14 de febrero de 2014, se le practicaran exámenes de aptitud laboral-periódico y le diagnosticaran Dolor lumbar crónico, Epicondilitis, Defecto de refracción y Síndrome de túnel carpiano; no le consta las amenazas ni la fecha en que salió del Municipio de Caucasia; que la demandante haya informado al empleador sobre el desplazamiento forzado; que el 3 de octubre de 2016 haya tenido una crisis nerviosa; que el 4 de octubre de 2016 la demandante se haya presentado a la empresa con más personas y aclaró que la demandante fue atendida para escucharla y en esa oportunidad manifestó que no quería volver a trabajar y se acordó la terminación del contrato de común acuerdo, y que ese acuerdo cumpliera con las perspectivas económicas de la demandante para no quedar con deudas y obtener una suma de dinero adicional, por lo que se acordó el pago de \$7.342.023 como bonificación por retiro más \$6.020.487 como compensación económica; que no le consta que a partir de la terminación del contrato laboral con la empresa demandada, la enfermedad que padecía se agudizó. Y acepta los demás hechos de la demanda.

Respecto a las pretensiones de la demanda, acepta se declare la existencia de la relación laboral regida por un contrato a término indefinido; los extremos temporales, y que la terminación del contrato tuvo lugar el día 4 de octubre de 2016, mediante un acuerdo de terminación de contrato laboral suscrito por las partes. No acepta las demás pretensiones de la demanda. Propuso como

excepciones las de petición de lo no debido; inexistencia de la obligación; pago; y prescripción.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 25 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Envigado, ABSOLVIÓ a la sociedad ALMACENES ÉXITO S.A., de todas las pretensiones formuladas en su contra por la Sra. Alba Lucía González Puerta. CONDENÓ en costas a cargo de la parte demandante.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de la parte demandante interpone recurso de apelación exponiendo que en primera instancia se absolvió a la accionada de las pretensiones de la demanda y le imputa a la parte demandante la obligación de acreditar los vicios en el consentimiento que se ejercieron frente a ella en el reunión que dio lugar a la suscripción del acuerdo terminación del contrato de trabajo, al considerar que ese hecho no fue demostrado e indicó que era poco creíble los argumentos de la demandada, al haber esperado casi 3 años para formular la demanda para poner en conocimiento la coacción que se ejercieron.

En el proceso se puede evidenciar de manera clara la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la demandante, que la prueba documental no fue tachada; que la demandante se encontraba incapacitada desde el año 2014 en forma continua e ininterrumpida y esas incapacidades se extendieron hasta el año 2016 fecha en que se suscribió el acuerdo en el cual se dio por terminado el vínculo laboral; también se encuentra acreditado el matrimonio de la demandante con el Sr Cristian David Ocho Pineda, quien fue asesinado el 3 de octubre 2014, acreditado con las denuncias presentadas en las Fiscalía General de la Nación, que la demandante y su núcleo familiar en esa fecha, fue amenazada y ello la obligó a desplazarse inicialmente al Municipio de Medellín, luego al Municipio de Guarne y posteriormente al Municipio Bello, acreditandose una situación de vulnerabilidad de esta; cuando fue interrogada por el despacho de las razones por las cuales no había iniciado una acción administrativa o judicial cuando suscribió el acuerdo de terminación de vínculo laboral, ella indicó que debía procurar por su bienestar y el de su familia porque estaba en riesgo su vida, y con ello se evidencia la vulnerabilidad de la Sra. Alba Lucía González Puerta.

Adicionalmente, se aportó al plenario, diferentes comunicaciones que fueron puestas en conocimiento de Almacenes Éxito, donde la accionante solicitó reiterativamente el traslado porque temía por su vida y de su familia. Comunicaciones que fueron puestas en conocimiento de la Sra. Blanca Rojas la cual aseguró en su testimonio que no recordaba ese hecho; que dichas comunicaciones no fueron valoradas en primera instancia.

Resalta que la tacha de falsedad que fue formulada contra la testigo Sra. Blanca Rojas, debe prosperar, porque por la existencia de un contrato laboral con la accionada, su declaración iba a tender a favorecer a la accionada y ello ocurrió cuando la Sra. Blanca Rojas indicó, que la solicitud para llegar al presunto acuerdo con Almacenes Éxito S.A fue a petición de la accionante, situación que fue desmentida por la representante legal de Almacenes Éxito S.A al haber manifestado que fue el empleador quien solicitó la reunión y fue la jefe de recursos humanos Sra. Blanca Rojas quien se comunicó con la demandante y le solicitó la reunión, que dio lugar a la terminación del vínculo laboral, por lo que no es cierta la declaración de dicha testigo. Y porque afirma no recordar estos hechos puntuales que se le preguntaban, dado que, dijo haber estado presente en dos reuniones, que la primera era para conocer los motivos por los cuales la demandante estaba solicitando que se le indemnizara y la segunda reunión fue el ofrecimiento económico que se le hizo, pero al ser interrogada de cuáles eran los motivos que aducía la demandante, manifestó que no lo recordaba pero al contrario recordaba otros hechos, y por ello considera que la Sra. Blanca Rojas favoreció a Almacenes Éxito S.A con su declaración.

Lo anterior, para explicar, que la sociedad Almacenes Éxito S.A sabía los riesgos que corría la demandante, al ser solicitado en varias oportunidades que la reubicaran en otro puesto de trabajo; está demostrado que el cónyuge de la demandante fue víctima de homicidio por grupos al margen de la ley, que la familia estaba amenazada y que tuvo que salir huyendo de Cauca.

Señala el apoderado de la parte demandante, que con base en la regla de la lógica, de la sana crítica y la experiencia, ¿por qué, al terminar las incapacidades de la demandante que duraron más de dos años, Almacenes Éxito S.A empezó a comunicarse con al accionante y citarla a reuniones con intención de ofrecerle la terminación del vínculo laboral?; afirma que esa petición no surgió de la demandante y la misma demandante manifestó que su sustento dependía de su trabajo, que ella jamás quería ser reubicada y tenía problemas de salud que le impedían conseguir un trabajo y el empleador se

aprovecha de esa situación lo cual se relaciona con lo dicho por los testigos de la accionada, que al finalizar la incapacidad fue llamada por el empleador para que se presentara en Caucasia, lo que llevó a la demandante a una crisis y estando hospitalizada, fue llamada para que se presentara en el Municipio de Envigado, oportunidad en que la demandante se encontraba bajo los efectos de un miedo insuperable, por ser su vida y la su familia la que estaba en juego y se generó una presión en la reunión.

Que la demandante no tiene cómo acreditar ese hecho, al haberse dado de manera privada, por lo que era la demandada quien se encontraba en la mejor posición para demostrar que este supuesto no se dio, en aplicación de la carga dinámica de la prueba; que los testigos informaron que al salir la demandante de esa reunión, salió llorando y dijo que no trabajaba para la entidad y si bien salió con un dinero, ello no materializa la voluntad que tenía la demandante al ir a la reunión; que no es clara la terminación del contrato dadas las diferentes solicitudes elevadas de traslado del puesto de trabajo, por lo tanto asegura que se ejerció unas presiones indebidas que se tiene que relacionar con las situaciones de tiempo, modo y lugar como se dieron.

Aunado a ello, se debe tener en cuenta la violencia de género que se ejercen frente a las mujeres y al estar la demandante en una situación de debilidad manifiesta, el juez debe interpretar los argumentos imponiendo una mayor carga a la parte demandada. Señala que la representante legal en el interrogatorio de parte y la testigo Blanca Rojas informaron que la demandante no quería regresar a laboral a la sede de Caucasia, pero en la reunión la presionaron y le dijeron que solo podía presentarse allá y al no presentarse le aplicaban el abandono de trabajo o tenía que renunciar; los testigos informan que al salir la demandante de esa reunión, no era su voluntad renunciar y se habían ejercido muchas presiones.

Con fundamento en lo anterior, solicita declare la tacha del testigo Sra. Blanca Rojas por favorecer a la accionada y se revoque la sentencia al estar acreditados los vicios del consentimiento, en especial, la fuerza que se ejercicio frente a la accionante al someterla a una presión física y moral, con el propósito que celebrar ese contrato, produciendo en la accionante un sentimiento de miedo y temor que le resto poder de decisión. Y en ese sentido está acreditado que el acuerdo de terminación de contrato laboral es nulo o ineficaz por que adolece de vicios del consentimiento.

En esa medida solicita se revoque la decisión del juez de primera instancia en cuanto dio por no acreditado este hecho y se accedan a las pretensiones de la demanda, esto es declarar la nulidad y/o ineficacia del contrato suscrito el 4 de octubre de 2016, por ser ineficaz por adolecer los vicios del consentimiento y acceda al reintegro de la demandante por estar acreditado que gozaba de una estabilidad laboral reforzada, porque desde el año 2013 estaba en un proceso de calificación de pérdida de la capacidad laboral y tenía restricciones laborales y se encuentra acreditada la situación de vulnerabilidad de la accionante, que conocía el empleador.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la sociedad accionada solicita que la sentencia sea confirmada porque nunca se configuró la calidad de desplazada de la demandante ya que las bases sobre las cuales se apoyó para aducir tal calidad son falsas sin que exista prueba sumaria de dicha calidad y no existe prueba de haber acudido ante la Unidad de Registro Único de Víctimas, ni solicitado su inscripción; considera que es un indicio que la demandante no sea desplazada, ante la negativa a inscribirse en tal registro y el no haberlo hecho durante los más de tres años transcurridos hasta la presentación de la demanda, y los hechos que según la demandante, dieron origen a su alegado desplazamiento, no están relacionados con amenazas a la demandante o a su familia, pues existió una separación de su exesposo hacía cinco meses el cual vivía con otra mujer, según la entrevista de la Fiscalía de Caucasia, en el cual, la misma demandante afirma que a quien únicamente amenazaron fue a su exesposo; en dicha declaración, no se hizo referencia a grupo al margen de la ley ni amenazas a la demandante o a su familia.

Que posteriormente existe un relato ante la Fiscalía General de la Nación, del 19 de noviembre de 2014, donde empieza a hablar de constreñimiento y desplazamiento, hablando de supuestas amenazas con la muerte de su exesposo, pero existe confesión previa, que la causa de la muerte de su exesposo no era por circunstancias del orden público.

Y frente a las presuntas solicitudes de traslado, asegura que los documentos no se entregaron a su representada, excepto el enviado por el personero de Guarne que se recibió posterior a la terminación del contrato; los demás documentos no cuentan con constancia de haber sido recibidos; los correos electrónicos de solicitud de traslado, corresponden a “pantallazo”, no se demuestra el año, y en ese sentido la declaración de la Sra. Blanca Rojas es

clara cuando afirmaba que no recordaba dichos documentos, pues nunca fueron recibidos.

En relación a la estructuración de pérdida de capacidad laboral, la no aplicabilidad a la demandante de la Ley 361 de 1997 y la negociación del acuerdo de terminación del contrato válidamente celebrado, se remitió a los alegatos de conclusión de la primera instancia y a la repuesta a la demanda, siendo acogidos los argumentos expuestos en primera instancia.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

Para el caso concreto, conforme al recurso de apelación presentado, el problema jurídico en esta instancia se centra en determinar: i) Si hay lugar a declarar la nulidad y/o ineficacia del acuerdo de terminación del contrato laboral suscrito por las partes el 4 de octubre de 2016, ante la existencia de vicios en el consentimiento, especialmente, el elemento fuerza; ii) Si hay lugar a declarar la tacha de la testigo Blanca Isabel Rojas; iii) Si la demandante tiene derecho al reconocimiento de las pretensiones de la demanda.

En primera instancia se absolvió de las pretensiones invocadas en la sentencia, por considerar que al haber existido un acuerdo de voluntades no hay lugar a invocar la estabilidad laboral reforzada ni de solicitar el reintegro laboral; y en igual forma absolvió de la solicitud de declarar nulo o ineficaz el acuerdo de terminación del contrato laboral suscrito el 4 de octubre de 2016, ante la carencia probatoria que recaía en la parte accionante, al no haber demostrado los vicios del consentimiento.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizará el recurso en el siguiente orden:

1. Ineficacia del acuerdo celebrado por las partes, para dar por terminado del contrato de trabajo

Al respecto, asegura la parte demandante en su demanda y en el interrogatorio de parte, la existencia de vicios en el consentimiento al momento en que fue celebrado el acuerdo de terminación del contrato laboral, toda vez que ante la terminación de su incapacidad laboral, debía retornar a prestar el servicio en la sucursal de Caucasia, lugar de donde había tenido que retirarse, debido a la muerte de su cónyuge y por amenazas en contra de su vida y la de su núcleo familiar; que en varias oportunidades solicitó a sus superiores señores Santiago Garzón y Blanca Rojas el traslado a otra sucursal, lo cual no logró;

que fue citada en tres oportunidades a reuniones por el Sr. Santiago Garzón, el cual la presionaba a renunciar; que un día antes de la terminación de su incapacidad laboral, el 3 de octubre de 2016, entró en crisis de ansiedad y el Sr. Santiago Garzón la citó el 4 de octubre de 2016 en las instalaciones del Almacenes Éxito Envigado; y en la reunión del 4 de octubre de 2016 se sintió obligada y constreñida a firmar el acuerdo de terminación del contrato laboral, pues de lo contrario sería despedida por no haber asistido ese día a laborar.

En relación a los acuerdos de voluntades, la Corte Suprema de Justicia ha determinado que los mismos deben ser libres de todo vicio de consentimiento, al señalar en la sentencia SL 4989 de 2019:

“En concordancia con lo anterior, ha admitido anular los acuerdos conciliatorios al acreditar alguno de los vicios del consentimiento (error, fuerza o dolo), o ante el evento de demostrarse que el acuerdo versó sobre derechos ciertos e indiscutibles.

*“Al respecto, se ha precisado que **el consentimiento que se exige en materia laboral para la validez de los diferentes actos jurídicos debe ser libre y espontáneo y no debe adolecer de ningún vicio.** En esa dirección, se ha sostenido que el juez laboral no puede presumir los vicios en el consentimiento ni suponer su existencia, pues deben estar suficientemente acreditados dentro del juicio, en el entendido de que «con arreglo a los arts. 1508 a 1516 del C.C, el error, la fuerza y el dolo como vicios del consentimiento capaces de afectar las declaraciones de voluntad, **no se presumen, deben acreditarse plenamente en el proceso**» (CSJ SL16539-2014, CSJ SL10790-2014 y CSJ SL13202-2015).*

Con tal norte, esta Corporación ha precisado que no cualquier vicio es suficiente para declarar la nulidad de una conciliación, sino que éste debe ser de tal magnitud que sea evidente ante una «mera y simple lectura del contenido del acta» e incluso sin necesidad de acudir a otros medios probatorios.” (Resalto de la Sala)

En relación a los elementos que configuran los vicios del consentimiento, ello es, el error, la fuerza y el dolo, los mismos se encuentran plasmados en los arts. 1511, 1513 y 1515 del Código Civil.

De la lectura de los artículos reseñados se desprende que el error se dirige al indebido o incorrecto entendimiento frente al objeto sobre el que versa un acto, creyendo que es uno totalmente diferente al que realmente se está celebrando. Por dolo se entiende como el engaño que sufrió uno de los contratantes por el otro; y la fuerza versa en la existencia de una presión o temor que es generado por una de las partes de la otra, y que es de tal magnitud que su voluntad no se torna en libre y voluntaria.

Al respecto, en la sentencia SL 4066 de 2021 se definió al error y al dolo así:

“Sobre el particular, cabe precisar que el consentimiento que se exige en materia laboral para la validez de la conciliación debe ser libre y voluntario, despojado de error, fuerza o dolo. Según se desprende de los hechos de la demanda, son estos los vicios que discute la parte actora para pretender invalidar el acuerdo, específicamente en lo que tiene que ver con la necesidad de estar desprovisto de error y de dolo.

El error consiste, básicamente, en una idea inexacta que se forma un contratante sobre uno de los elementos del contrato, como sería respecto de la naturaleza del acto, frente a la identidad del objeto, sobre su calidad o en la persona con la que se contrata, tal como lo prevén los artículos 1510 a 1512 del CC; y, en relación al dolo, según se desprende del artículo 1515 ibidem, radica en el engaño que una de las partes genera al otro para inducirlo a la celebración del contrato o del acto, por lo que para su existencia se requiere de una conducta que intencionalmente provoca una idea errónea o equivocada, la cual resulta determinante en la emisión de su declaración de voluntad.”

Y la fuerza en definida en la sentencia SL 2888 de 2019 señalando:

*“Sobre el particular, debe señalarse que la impresión y el temor que la fuerza o violencia genera en una persona, debe ser de tal magnitud, que la manifestación de la voluntad no se puede tener como libre, espontánea y natural, **sino que es producto de la presión, coacción o del constreñimiento, lo cual debe quedar plenamente demostrado**, y cuya carga probatoria le corresponde al trabajador por ser quien la alega; sin embargo, ello no acontece en este caso, puesto que de las pruebas denunciadas no se logra llegar a deducción distinta a la que adujo el juez de segunda instancia.”*

Partiendo de lo anterior, y después de ser valorada en su conjunto, con base en las reglas de la **sana crítica y la libre formación del convencimiento** (art. 61 del CPTSS), y dando aplicación de la sentencia SL4823 de 2019 que establece *“En este punto, considera oportuno la Corte reiterar que conforme lo dispuesto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, el funcionario judicial en ejercicio de las facultades propias de las reglas de la sana crítica, puede apreciar libremente los diferentes medios de convicción. Igualmente, como se adoctrinó en la sentencia CSJ SL2049-2018, la formación del libre convencimiento con el principio de la sana crítica, implica que aquel debe fundar su decisión en aquellos elementos probatorios que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables.”*, se permite la Sala concluir que para el presente caso, **no se encuentra acreditada la existencia de error y dolo**, al momento en que la Sra. Alba Lucía González Puerta celebró el acuerdo de terminación del contrato de trabajo, toda vez que en su interrogatorio de parte aceptó haber firmado dicho acuerdo y que en ningún momento expresó que haya sido engañada por parte de Almacenes

Éxito frente al documento que le fuera presentado y firmado por ella, es decir, tenía claridad que se trataba de su terminación del contrato por mutuo acuerdo.

No obstante lo anterior, fue clara la accionante y su apoderado en señalar la existencia de la fuerza, presión y coacción, en la toma de la decisión de firmar el acuerdo de terminación el contrato de trabajo y en el recurso de apelación se solicitó dar aplicación a la inversión de la carga de la prueba ante la imposibilidad de la demandante de demostrar la fuerza a la que fue sometida, y a realizar un análisis de este caso desde la perspectiva de género, teniendo en cuenta la violencia que se ejerce frente a las mujeres y al estar la demandante en una situación de debilidad manifiesta.

Visto lo anterior, primeramente se hace necesario hacer un pronunciamiento frente a la perspectiva de género, en el sentido que en el plano internacional los tratados e instrumentos de mayor relevancia en este aspecto son la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1967); la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW (1981)¹; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer (1993); y la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Todos estos emanados de diversas dependencias de la Organización de Naciones Unidas, ONU. Así mismo, a nivel regional, la Organización de Estados Americanos, OEA, en las Convenciones Americana sobre Derechos Humanos² e Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “*Convención de Belém do Pará*”(1995)³, proscribe este tipo de discriminación. Todos los anteriores instrumentos internacionales consagran el principio de igualdad y no discriminación y, adicionalmente, algunos definen de diversa forma los conceptos de **discriminación** y **violencia contra la mujer**.

Partiendo de lo anterior, respecto del enfoque diferencial en las decisiones judiciales, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia, en sus Salas de Casación Civil y Laboral, en recientes sentencias. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STC2287 del 21 de febrero de 2018, precisó las sub reglas que debe tener en cuenta el operador jurídico, respecto de la valoración probatoria en la resolución de casos desde la perspectiva de género, señalando:

¹ Ratificada por Colombia mediante la **Ley 51 de 1981**.

² Ratificada por Colombia mediante la **Ley 16 de 1972**.

³ Ratificada por Colombia mediante la **Ley 248 de 1995**.

*“El funcionario judicial tiene el deber funcional de aplicar el «derecho a la igualdad» dentro de las decisiones judiciales en virtud de los convenios internacionales ratificados por Colombia que así lo imponen y del artículo 13 de la Carta Política que se encarga de establecerlos como norma nacional fundamental **e introducir la perspectiva de género en las decisiones judiciales a efecto de disminuir la violencia frente a grupos desprotegidos y débiles como ocurre con la mujer, implica aplicar el «derecho a la igualdad» y romper los patrones socioculturales de carácter machista** en el ejercicio de los roles hombre-mujer que por sí, en principio, son roles de desigualdad.*

*Juzgar con «perspectiva de género» es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y **VALORARLA DE FORMA DIFERENTE** a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las **CATEGORÍAS SOSPECHOSAS AL MOMENTO DE REPARTIR EL CONCEPTO DE CARGA PROBATORIA**, como sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niño, grupos LGBTI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situación diferencial por la especial posición de debilidad manifiesta, **el estándar probatorio no debe ser igual**, ameritando en muchos casos el ejercicio de la facultad-deber del juez para aplicar la ordenación de prueba de manera oficiosa.*

Es necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano.

*Para el ejercicio de un buen manejo probatorio en casos donde es necesario el «enfoque diferencial» **es importante mirar si existe algún tipo de estereotipo de género o de prejuicio que puedan afectar o incidir en la toma de la decisión final**, recordando que «prejuicio o estereotipo» es una simple creencia que atribuye características a un grupo; que no son hechos probados en el litigio para tenerlo como elemento esencial o básico dentro del análisis de la situación fáctica a determinar.*

Discriminación de género, entonces, es acceso desigual a la administración de justicia originada por factores económicos, sociales, culturales, geográficos, psicológicos y religiosos, y la Carta Política exige el acceso eficiente e igualitario a la administración de justicia; por tanto, si hay discriminación se crea una odiosa exclusión que menoscaba y en ocasiones anula el conocimiento, ejercicio y goce de los derechos del sujeto vulnerado y afectado, lo que origina en muchas ocasiones revictimización por parte del propio funcionario jurisdiccional.

Es muy común encontrar problemas de asimetría y de desigualdad de género en las sentencias judiciales; empero, no se puede olvidar que una sociedad democrática exige impartidores de justicia comprometidos con el derecho a la igualdad y, por tanto, demanda investigaciones, acusaciones, defensas y sentencias apegadas no solo a la Constitución sino a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales aceptados por Colombia que los consagran. (...)” (Resalto de la Sala)

Partiendo de la jurisprudencia en principio debe advertirse que para el caso bajo análisis se evidencia “*algún tipo de estereotipo de género o de prejuicio que puedan afectar o incidir en la toma de la decisión final*”, pues se trata de una terminación del contrato que versa o que se encuentra directamente relacionada con la condición de mujer desplazada por la violencia del Municipio de Caucasia, que se encuentra en una presunta debilidad manifiesta

con ocasión a las incapacidades presentadas desde el año 2014 al 2016, lo que hace que desde el punto de vista probatorio, se deba entrar a realizar un análisis más detenido, minucioso y juicioso de las pruebas que fueran aportadas, bajo este entendido, y como la hoy demandante estaba ante una imposibilidad y desigualdad de demostrar la presunta fuerza a la que estuvo sometida en las reuniones celebradas con el jefe de gestión humana de Almacenes Éxito y al momento de firmar el acuerdo de terminación de contrato de trabajo, toda vez que la única persona que presenció la reunión final, fue la Sra. Blanca Isabel Rojas que igualmente es empleada de Almacenes Éxito, es por lo que se hace necesario hacer un análisis minucioso de la prueba aportada al proceso y ser privilegiada la prueba indiciaria que surge a partir del plenario y lo acaecido en el proceso, entendiéndose entonces como prueba indiciaria a tener en cuenta, “una señal que da a conocer lo oculto” conforme definición de la RAE.

Siendo, así las cosas, con base en las reglas de la **sana crítica**, entre ellas **las máximas de la experiencia**, se logra inferir que la **fuerza** invocada por la accionante si ocurrió con base en las siguientes pruebas:

1º. La demandante estuvo casada con el Sr. Cristian David Ochoa Pineda, el cual falleció el **3 de octubre de 2014** por hechos violentos ocurridos en el Municipio de Caucasia, según consta en escritura pública, registro civil de nacimiento y de defunción y la denuncia presentada ante la Fiscalía (fls 43 a 48 y 73 a 75 del expediente digital 01), y debido a amenazas, la demandante salió del Municipio de Caucasia el 24 de octubre de 2014, según se extrae de la denuncia penal presentada ante la Fiscalía el 19 de noviembre de 2014 (fls. 76 a 80).

Y se encuentra acreditado a fls 83 del expediente digital 01, solicitud de traslado con fecha de elaboración del 17 de diciembre de 2014; correos electrónicos que no cuentan con el año de elaboración, dirigidos a “auxiliaroficinagestionhumana.exitocaucasiarupo-éxito.com” los días “mie 07/09 6:48pm, mar 30/08 11:30 am, lun 29/08 5:04pm” donde le solicita a una persona de nombre “Sindy”, le informe si la persona encargada de gestión humana del Éxito de Caucasia se pronunció sobre la solicitud de traslado (fls. 86 a 87); y solicitud de traslado elevada por la Personería Municipal de Guarne, la cual contiene fecha de envío por correo postal del 7 de octubre de 2016 con firma de recibido (fls 83 a 85).

De los acontecimientos narrados, se logra inferir sin dubitación alguna que la real intención de la demandante se dirigía a cambio del lugar de trabajo, y en ningún momento a dar por terminado el contrato de trabajo, lo cual también se logra observar, con las declaraciones del hijo y de la nuera de la demandante, quienes sostienen que el interés de la Sra. Alba Lucia González Puerta era obtener la reubicación.

2º. Se encuentra probado en el plenario, que la Sra. Alba Lucía González Puerta celebró contrato de trabajo con Almacenes Éxito S.A a término indefinido, el 10 de noviembre de 2010, desempeñando el cargo de Chef II Éxito, según se extrae del certificado laboral de fl 117 del expediente digital 01, aunado a ello, está probado con el examen de ingreso visible a fls 22 a 28, que para el mes de noviembre de 2010 la demandante estaba en condiciones aptas de salud.

En examen de salud ocupacional visible a fls. 34 a 40 el cual no cuenta con fecha de elaboración, se extrae que dentro de los hallazgos: “dolor y ... en manos leve. Dolor en codos bilateral (epicondilo) moderado. (...) Diagnósticos: 1. Dolor Lumbar crónico, 2. Epicondilitis en estudio, 3. Defecto de difracción..., 4. Sobrepeso, 5. Síndrome del túnel del carpo”.

Debido a los padecimientos de salud presentados, la demandante tuvo incapacidades por enfermedad general, desde el 24 de enero de 2011 al 17 de febrero de 2014 en forma interrumpida (fls. 126 a 127) e incapacidades ininterrumpidas desde el **24 de febrero al 27 de noviembre de 2015** bajo el diagnóstico de Epicondilitis media y Síndrome de Túnel del Carpo (fl. 131); y presentó **incapacidades desde el año 2015 hasta octubre de 2016 en forma continua**, conforme fue aceptado por la Sra. Blanca Isabel Rojas (testigo de la accionada y jefe de recursos humanos) quien indicó, que laboró en el cargo de recursos humanos en los años 2015-2016, y solo conoció físicamente a la demandante en una reunión que tuvieron, dado que el tiempo que la testigo ejerció como jefe de recursos humanos, la accionante todo el tiempo había estado incapacitada; y aceptó haber estado presente en la reunión del 4 de octubre de 2016.

En lo que concierne a la tacha de la testigo Blanca Isabel Rojas, si bien es cierto, existieron contradicciones entre su declaración y el interrogatorio de parte de la representante legal de Almacenes Éxito S.A, la Sala considera que dicho testimonio no puede ser tachado de falsedad, al evidenciarse que en forma desprovista de un interés parcializado, fue la única prueba que sirvió

para demostrar que en los años 2015-2016 la demandante se encontraba incapacitada en forma continua al tratarse de la jefe de recursos humanos en el momento en que la demandante estuvo incapacitada, y adicional a ello se trató de la testigo que estuvo presente en la reunión del 4 de octubre de 2016, en virtud de lo cual el análisis de dicha prueba al igual que de la prueba restante se debe analizar en su conjunto y no en forma aislada.

- Siguiendo con el estudio de las pruebas, se aportó al plenario la recomendación laboral realizada por la EPS Saludcoop al empleador, el 19 de septiembre de 2014 (fls. 51 a 52), las cuales se dirigían a restringir el uso de la fuerza de las manos o levantar cargas y realizar actividades repetitivas con las manos. En forma expresa se recomendó a la empresa "... disminuir la ejecución de las labores que impliquen agarres a mano llena o pinzas que requieran fuerza con las manos, no debe realizar tareas como restregar, torcer, picar, pelar y tajar, se recomienda el uso de herramientas o ayudas mecánicas... disminuir la ejecución de labores que impliquen repeticiones de alta frecuencia por más de 30 minutos o movimientos repetitivos con las manos ... se restringe la manipulación de cargas en general..., no debe exponerse a cambios bruscos de temperatura o exponerse a temperaturas extremas de frío-calor, ...".

- Dentro de la prueba documental obra prueba de las calificaciones de pérdida de la capacidad laboral realizadas por la EPS SALUDCOOP, ARL SURA, y las Juntas de Calificación de Invalidez, determinando la Junta Nacional de Invalidez que la demandante contaba con una PCL de 18.76% estructurada el 1º de junio de 2017, siendo su origen laboral (fls 58, 69, 90 a 110).

Del dictamen emitido por la EPS SALUDCOOP el 29 de julio de 2014 en la descripción se plasmó que la demandante consultó por una patología de síndrome de túnel del carpo bilateral y epicondilitis medial bilateral, con EMG del 27 de mayo de 2014; y en la relación de documentos expone "*30/11/2012 Valoración por Reumatología. Dolor corporal generalizado especialmente en tejidos blandos (Epicondilitis mediales, sitios de inserción de la pata de ganzo, antepie), artralgias mecánicas en las manos y pies con mejoría parcial con aines, sintomatología que se exacerba con jl (estar de pie, cambios de temperatura, movimientos de manos)... 15/01/2014. Dolor en mano. ID artrosis...*" (fl. 58)

Del dictamen de la Junta Nacional de Calificación, se extra el recuento realizado por la Junta Regional de Calificación, en donde se indicó que la

demandante fue sometida a procedimiento quirúrgico de la mano izquierda relativo a liberación del nervio mediano en carpo derecho el 16 de enero de 2017, y la mano izquierda y codos con manejo conservador con analgesia, infiltraciones y terapia física (fl. 103 a 110)

Las anteriores pruebas dirigen el convencimiento de esta Sala a la existencia de una fuerza por parte de la sociedad Almacenes Éxito S.A, pues dentro de las máximas de la experiencia no es coherente que:

1º) Una persona amenazada y desterrada del lugar donde estaba domiciliada, que tiene como único sustento e ingresos económicos la labor ejercida en Almacenes Éxito S.A, como chef, decida de mutuo acuerdo dar por terminado el contrato de trabajo, a sabiendas que no puede seguir realizando esa labor por su salud, pues está con restricciones para realizar actividades inherentes a su labor de chef, como lo es picar, pelar y tajar, y se le recomendó disminuir la ejecución de labores que impliquen repeticiones de alta frecuencia y abstenerse de los cambios bruscos de temperatura o exponerse a temperaturas extremas de frío-calor.

2º) Una persona que se encuentra incapacitada en forma continua desde el 17 de febrero de 2014 al 3 de octubre de 2016, manifieste en forma sorpresiva, que tiene interés de no continuar laborando, a sabiendas que en repetidas oportunidades elevó solicitud de traslado, pues vivía desde hacía más de un año y medio en municipios aledaños a Medellín.

3º) Tampoco es coherente y mucho menos creíble, que bajo dichas condiciones (mujer desplazada, que su único sustento era la labor desempeñada en Almacenes Éxito S.A e incapacitada desde 2014 a 2016 para laborar) le haya manifestado a Almacenes Éxito S.A, su interés no querer seguir en la compañía y “empezar de cero”, según palabras de la testigo Blanca Isabel Rojas, a sabiendas que la demandante venía con un diagnóstico de síndrome de túnel del carpo y epicondilitis, contaba con recomendaciones laborales y con incapacidades continuas desde febrero de 2014 a octubre de 2016, por lo tanto, ¿en qué labor iba a iniciar la demandante desde cero? ¿Cómo iba a obtener ingresos cuando solo contaba con sus manos para laborar y sus estudios eran en gastronomía? ¿Cómo iba a empezar desde cero, cuando su fuerza de trabajo estaba limitada por el síndrome de túnel del carpo y la epicondilitis medial, y contaba con restricciones laboral dirigidas al empleo de sus manos?

Por otro lado, es sospechoso el hecho que la demandante tuviera que retornar al trabajo el 4 de octubre de 2016, ante la terminación de la incapacidad

médica, y el mismo día se presentara un acuerdo de voluntades dando por terminado el contrato de trabajo.

- Frente a la prueba testimonial, los testigos **Juan Carlos Londoño González y Laura Morales Osorio** (hijo y nuera de la demandante), pese a no tener conocimiento directo de lo ocurrido en la reunión adelantada el 4 de octubre de 2016, dado que los hechos por ellos narrados de lo allí ocurrido, solo tiene como sustento en lo que la Sra. Alba Lucía González Puerta les contó; así mismo, tampoco fueron testigos presenciales de las llamadas que le realizaba el Sr. Santiago Garzón a la demandante para citarla a reuniones, lo cierto es que son concordantes en afirmar, que acompañaron a la demandante a las instalaciones de Almacenes Éxito Envigado el 4 de octubre de 2014, sin que los hayan dejado ingresar a la reunión; que a la salida de la misma, la demandante salió llorando, temblando y les manifestó que ya no trabajaba para Almacenes Éxito S.A; que la Sra. Alba Lucía González Puerta dejó de trabajar para Almacenes Éxito S.A, porque cuando a ella la iban a reintegrar, debía presentarse en el Municipio de Caucasia y ninguno podía volver allá porque el problema de regresar al Municipio de Caucasia era por amenazas de muerte; que la demandante trató de solicitar traslado a otra sede y para eso solicitaron ayuda de la Personería de Guarne, y según conversaciones que tenía con su madre.

En tanto, como prueba indiciaria debe decirse que no es normal, que a la reunión del 4 de octubre de 2016 no se le haya permitido el ingreso, al hijo de la demandante, siendo dicho actuar un indicio de la fuerza que se ejerció sobre la demandante, al punto de no poder consultar su decisión. Otro elemento que se refuta sospechoso, data del hecho de haber salido llorando la demandante de la reunión en donde se celebró el acuerdo de terminación del contrato, pues las reglas de la experiencia enseñan, que si se hace una transacción lo usual es que la trabajadora que pierde su trabajo se le ha compensado de tal forma que es satisfactorio el acuerdo.

- La testigo **Ingrid Andrea Ocampo Cano** (testigo de la demandante) indicó conocer a la señora Alba Lucia González Puerta porque laboraban juntas en Almacenes Éxito Caucasia aproximadamente 6 años, aclarando que trabajaron juntas 4 años porque la demandante estuvo incapacitada más de un año; que la demandante dejó de trabajar a Almacenes Éxito S.A por enfermedad porque estuvo un año incapacitada, que los compañeros de trabajo preguntaron por ella y les dijeron que la demandante tenía un problema en las manos y lo que se decía era que probablemente ya no volvió porque ya

no le servía a la empresa porque las manos no le servían, ya no era productiva; la testigo se enteró del asesinato del esposo de la demandante en Caucasia, el hijo le expresó que la demandante se tuvo que ir porque la amenazaron; las incapacidades de la demandante eran continuas; para el momento de la muerte del esposo, la demandante estaba incapacitada; no sabe si la demandante renunció o la despidieron; indicó que el sustento de la demandante lo derivaba del sueldo de Almacenes Éxito y no tenía otro ingreso; que en la actualidad la demandante no trabaja porque las manos no le sirven y el problema de salud que la demandante tenía en la empresa, persiste en la actualidad.

Testigo con la que claramente se logra direccionar el convencimiento, que el verdadero interés del empleador estaba dirigido específicamente a lograr una terminación del contrato de trabajo, dado que las limitaciones físicas de la Sra. Alba Lucia González Puerta que limitarían la productividad de la accionada en caso de reincorporarse a su labor.

- lo anterior se refleja igualmente en la historia clínica de la ESE Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, del 3 de octubre de 2016 a las 6:03pm, al cual acudió quedando consignado en el motivo de consulta “me siento mal “refiere paciente cuadro clínico de aprox 1 día de evolución caracterizado por llanto fácil, desanimo, dolor de cabeza y disconfort en el pecho, cuadro en relación a **evento emocional laboral**, perdida de pareja (aniversario de su muerte) no refiere ideación suicida de persecución” (fl. 111), se logra evidenciar el grado de angustia, temor, miedo que enfrentó la Sra. Alba Lucia González Puerta ante la posibilidad de retornar al Municipio de Caucasia, al punto que previo a su reingreso a la vida laboral debió acudir al servicio médico. Y de ese temor, miedo y angustia el empleador se aprovechó.

Por lo expresado es que considera la Sala que lo legal y pertinente es REVOCAR la sentencia de primera instancia, para en su lugar DECLARAR la ineficacia del acuerdo de voluntades que dio por terminado el contrato de trabajo entre las partes, por haber estado viciado por la fuerza.

2. En relación al reconocimiento de las pretensiones de la demanda

2.1. Reintegro

Estando claro que el 4 de octubre de 2016 las partes celebraron un acuerdo de terminación del contrato de trabajo, frente al cual se declara su ineficacia

por haber mediado el elemento fuerza, lo que generó un vicio en el consentimiento, considera esta Corporación que la consecuencia de dicha decisión, bajo el entendido que el acto jurídico celebrado nunca existió, implica que se entienda la demandante continuó laborando para Almacenes Éxito S.A. sin solución de continuidad desde el 4 de octubre de 2016.

Siendo así las cosas, se hace necesario ORDENARLE a la sociedad Almacenes Éxito S.A a reintegrar a la demandante al mismo cargo desempeñando o a uno de similares o mejores características, sin solución de continuidad, y seguidamente CONDENAR a la sociedad accionada al pago de la totalidad de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, vacaciones desde el 4 de octubre de 2016 hasta el reintegro. Sumas de dinero se pagarán debidamente indexadas, debido a la depreciación de la moneda, la cual no está llamada a soportar la demandante.

En igual sentido Almacenes Éxito S.A deberá pagar los aportes al sistema de seguridad social en salud (a la EPS en la que se encuentre afiliada al demandante) y en pensiones (ante Colpensiones por así haberlo solicitado en la demanda).

Advirtiéndole que para el cumplimiento de dicha orden, se deberá adoptar como salario devengado en el año 2016, la suma de \$1.437.900 según se extrae del acuerdo de terminación del contrato de trabajo y de la liquidación definitiva de prestaciones sociales de fls. 112 y 114.

En el presente caso no se analizará la procedencia o no de compensar los dineros pagados a la demandante, dado que la misma no fue propuesta en la contestación de la demanda y dicha excepción solo procede a solicitud de parte sin ser dable al Juez declararla en forma oficiosa.

2.2. Indemnización del art. 26 de la Ley 361 de 1997 modificado por el art. 137 del Decreto 019 de 2012;

Solicita la parte demandante en un aparte de su extenso recurso de apelación, que sea revocada la sentencia absolutoria de primera instancia y en su lugar se reconozcan las pretensiones de la demanda, esto es, se declare la nulidad y/o ineficacia del contrato suscrito el 4 de octubre de 2016 por adolecer los vicios del consentimiento y se accedan a las pretensiones de la demanda, ordenando el reintegro de la demandante, toda vez que se acreditó que gozaba de una estabilidad laboral reforzada y tenía restricciones laborales. Al

remitirnos al libelo genitor encontramos, que una de las pretensiones se dirige a condenar a la demandada al pago de la indemnización correspondiente a 180 días de salario.

Solicitud que se reconocerá bajo en entendido que de las pruebas aportadas, no existe dubitación en relación a la fuerza ejercida por el empleador Almacenes Éxito S.A sobre la demandante para que celebrara el acuerdo de terminación del contrato fue con ocasión al deterioro del estado de la demandante luego que desde el año 2012 fuera valorada por Reumatología, en donde se consultó por “Dolor corporal generalizado especialmente en tejidos blandos (Epicondilitis mediales, sitios de inserción de la pata de ganzo, ante pie), artralgias mecánicas en las manos y pies con mejoría parcial con aines, sintomatología que se exacerba con jl (estar de pie, cambios de temperatura, movimientos de manos)” y en el año 2014 se consultó nuevamente por dolor en mano (fl. 58); además presentó incapacidades continuas desde el **24 de febrero al 27 de noviembre de 2015** bajo el diagnostico de Epicondinitis media y Síndrome de Túnel del Carpo (fl. 131), y **desde el año 2015 hasta octubre de 2016**, sobre la misma patología conforme fue aceptado por la Sra. Blanca Isabel Rojas; y existieron recomendaciones al empleador proferidas por la EPS Saludcoop el 19 de septiembre de 2014 (fls. 51 a 52). En razón de ello, se **CONDENARÁ** a Almacenes Éxito S.A al reconocimiento y pago de la suma de \$8.637.400. Valor que deberá ser debidamente indexado al momento del pago efectivo de la obligación.

Se condenará a la sociedad accionada a reconocer la indemnización analizada, debidamente indexada al momento del pago efectivo.

2.3. Indemnización de perjuicios ocasionados por la terminación del contrato laboral

Se negará su reconocimiento, por no haberse demostrado, requisito indispensable para su reconocimiento, según se extrae de la sentencia del 9 de julio 2012, radicación 2002-00101-01 de la Sala Civil de la CSJ al sostener “... *no bastarán para que el reclamante se haga acreedor a una indemnización, sino que a la confluencia de esos requisitos deberá agregarse la demostración del perjuicio sufrido y del nexo de causalidad con la conducta del autor.*”, cosa que no ocurrió en el presente proceso pues no se demostró ninguno de los perjuicios alegados y mucho menos el nexo causal con la conducta desplegada por el empleador, más aún cuando existe prueba en el acuerdo de

voluntades donde el empleador pagaba \$16.517.870 a los cuales se le hacía una deducción de \$14.063.870 tendientes a efectuar el pago de aportes pensionales y salud, pago al fondo de empleados y descuentos APORTAR (fl 112 del expediente digital 01).

2.4 Costas en primera instancia y segunda instancia

Se CONDENARÁ en condena en costas a la sociedad Almacenes Éxito S.A en ambas instancias, en aplicación del numeral 4º del art. 365 del CGP que reza: *“4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.”*

En esta instancia costas en la suma de \$1.160.000.

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia, para en su lugar **DECLARAR** la ineficacia del acuerdo de voluntades que dio por terminado el contrato de trabajo entre las partes, por haber estado viciado por la fuerza.

SEGUNDO: ORDENARLE a la sociedad Almacenes Éxito S.A a reintegrar a la Sra. Alba Lucia González Puerta al mismo cargo desempeñando o a uno de similares o mejores características, sin solución de continuidad, y **CONDENAR** a la sociedad accionada, al pago de la totalidad de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales, vacaciones desde el 4 de octubre de 2016 hasta el reintegro, sumas de dinero que deberán pagar debidamente indexadas al momento del pago de la obligación. Así mismo, Almacenes Éxito S.A pagará los aportes al sistema de seguridad social en salud (a la EPS en la que se encuentre afiliada al demandante) y en pensiones (ante Colpensiones por así haberlo solicitado en la demanda) desde el 4 de octubre de 2016 hasta el reintegro.

Para el cumplimiento de dicha orden, se deberá adoptar como salario devengado en el año 2016, la suma de \$1.437.900, de conformidad con lo analizado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDENAR a Almacenes Éxito S.A al reconocimiento y pago de la suma de \$8.637.400 a la demandante, por concepto de indemnización del art. 26 de la Ley 361 de 1997. Suma que se deberá pagar indexada al momento del pago efectivo.

CUARTO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, frente a la absolución de la indemnización de perjuicios.

QUINTO: CONDENAR en condena en costas a la sociedad Almacenes Éxito S.A en ambas instancias. En esta instancia costas en la suma de \$1.160.000.

SEXTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE : ALBA LUCIA GONZÁLEZ PUERTA
DEMANDADO : ALMACENES ÉXITO S.A
TIPO DE PROCESO : ORDINARIO
RADICADO NACIONAL: 05-266-31-05-001-2019-00456
RADICADO INTERNO : 350-22
DECISIÓN : REVOCA, DECLARA, ORDENA, CONDENA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 21 de febrero de 2023 a las
8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 21 de febrero de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO